

Insisten en pedir un trato preferente a las empresas foráneas

La Cámara de Comercio de Puerto Rico llevó el reclamo a funcionarios del Senado estadounidense

miércoles, 17 de octubre de 2018 - 12:00 AM

Por José A. Delgado



El presidente de la Cámara de Comercio, Kenneth Rivera, participó en reuniones en Washington con asesores de senadores federales. (GFR Media)

Washington - Aunque las expectativas son aún bajas, la jefatura de la **Cámara de Comercio de Puerto Rico** abogó esta semana en el Senado de EE.UU. por que el **Congreso** reconsidere el trato que da la reforma contributiva federal a las empresas foráneas en la isla.

El presidente de la Cámara de Comercio, Kenneth Rivera, y parte de su liderato se entrevistaron, entre lunes y martes, con asesores de senadores estadounidenses, entre medio de un viaje dirigido a estrechar relaciones con organizaciones como la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el Instituto Cato y la Asociación de Abogados de EE.UU. (ABA)

Tanto la Cámara de Comercio estadounidense como el grupo de estudio libertario Instituto Cato y la ABA coinciden en respaldar la exención de Puerto Rico de las normas federales de cabotaje.

Las reuniones han querido sentar las bases en torno a asuntos que esperan elevar con más fuerza en 2019, cuando inicie la próxima sesión del Congreso. Tanto el Senado como la Cámara baja están en receso legislativo hasta mediados de noviembre.

Las conversaciones con asesores de los senadores Roger Wicker, republicano por Misisipi; Robert Menéndez, demócrata por Nueva Jersey; y Bill Nelson, demócrata por Florida, tuvieron el propósito principal de mantener la presión a favor de que las Corporaciones de Control Foráneo (CFC) tengan, por lo menos, una tasa más baja en Puerto Rico que en el resto de las jurisdicciones “extranjeras”.

Tanto Menéndez como Nelson están en récord apoyando alguna iniciativa que permita a las empresas CFC en Puerto Rico tener un trato preferente en lo que respecta al nuevo impuesto de 10.5% en sus productos intangibles.

La Cámara baja federal aprobó unas medidas que describen como “la reforma contributiva 2.0”, pero que principalmente persigue hacer permanentes los recortes aprobados en 2017 en las tasas tributarias para individuos. Pero, esos proyectos no tienen el camino despejado en el Senado.

Las esperanzas de que en esa legislación se incluya algún lenguaje para mejorar el trato a las CFC de Puerto Rico son casi cero. “No vislumbro que nada de esto se va a resolver de aquí a fin de año”, dijo el lunes Rivera, acompañado por el director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Miguel Vargas, y la directora de Asuntos Legislativos, Wanda Pérez.

El secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado, ha indicado que lograr algún trato favorable este año para las CFC dependería de conseguir un lenguaje beneficioso para la isla en el reglamento de la reforma contributiva federal.

Como presidente de la Cámara de Comercio, Rivera piensa que debe estudiarse cómo dar permanencia y certeza a los recaudos que deja el arbitrio de 4% sobre las ventas de las CFC, y cuyo crédito federal sigue dependiendo de una determinación temporal del Servicio de Rentas Internas (IRS).

“Es un asunto que se tiene que analizar, pero hay que ser cauteloso” para que no genere nuevas incertidumbres entre las empresas, dijo Rivera, en torno a un arbitrio que genera recaudos de alrededor de \$1,800 millones anuales.

En las reuniones con la Cámara de Comercio de EE.UU. y el Instituto Cato, los miembros de la Cámara de Comercio de Puerto Rico promovieron además asuntos como su rechazo a la orden ejecutiva del gobernador Ricardo Rosselló que elevaría a \$15 por hora el salario de los trabajadores de la construcción, cuando son contratados para proyectos vinculados a los fondos federales destinados a mitigar los daños causados por el huracán María.

“Todavía tenemos la esperanza de que el gobernador recapacite y esa orden la atempere a las necesidades de Puerto Rico”, indicó Rivera.

Las posibilidades de sacarle provecho al programa de “zonas de oportunidades”, promover la legislación de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, sobre la inversión en “zonas económicamente afligidas” y la posible privatización del Fondo del Seguro del Estado fueron otros asuntos sobre los que también buscaban conversar en algunas de sus reuniones, según Rivera.